

FSP-UGT rechaza unos recortes a los empleados públicos injustos e inútiles

La Federación de Servicios Públicos (FSP) UGT rechaza rotundamente tanto la forma como el fondo de las medidas presentadas por Gobierno para reestructurar las Administraciones Públicas. El Presidente del Gobierno ha anunciado en el Parlamento esta mañana el paquete de propuestas encaminadas a reducir el gasto de las Administraciones Públicas. Entre éstas – a falta de una exposición más detallada- se encuentran la de suspender el abono de la paga extraordinaria de navidad –en términos cuantitativos supone un recorte del 7% del salario-, el despido de empleados públicos a través de la reducción drástica de empresas públicas, la reducción de los días de libre disposición, etc...

Desde FSP-UGT contestaremos enérgica y contundentemente al que es el mayor agravio a las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos en la historia de la democracia española.

La FSP-UGT señala que la intervención de Mariano Rajoy en el Parlamento, adelantando los recortes a los empleados públicos, muestra el profundo desprecio que siente, tanto él como su Gobierno, por los trabajadores de los servicios públicos. Se trata de un insulto tanto por el fondo como por la forma – haciéndolas públicas antes de iniciar ninguna negociación con los representantes de los trabajadores, sin respetar los acuerdos ni la buena fe en el principio de negociación. Una falta de respeto reiterativa, dadas las medidas y las declaraciones que diversos miembros de su ejecutivo han realizado sobre los funcionarios.

El sindicato ha señalado que las medidas, además de volver a cargar sobre los empleados públicos el peso de la crisis, de los derroches y los desmanes de los responsables políticos y financieros de España, serán inútiles para solventar a situación de la economía española.

Estas medidas no alivian el descrédito de la economía española ni ayudan al crecimiento. Al contrario, abundarán en la recesión, disminuyendo drásticamente la capacidad de ahorro y consumo de millones de trabajadores públicos y su índice de confianza como consumidor.

Estos recortes se suman a los impuestos a los empleados públicos desde 2010 y aumentan la pérdida de poder adquisitivo que arrastran, cifrada en más del 38% desde el año 1982

A pesar de la insistencia del Ejecutivo de presentar las medidas como iniciativa propia, todos los datos aportados reflejan que se trata de un rescate real, con todas las consecuencias a nuestro Estado.